de acceder, o intentar acceder, a las cuentas de correo de otros usuarios, o a cualesquiera contenidos que resulten accesibles, por medios o procedimientos distintos a los autorizados.

4.2. Uso conforme a la política de No Abuso del Correo.

La Administración de la Junta de Andalucía no autoriza el uso abusivo del Correo Electrónico del Ciudadano. El usuario se compromete a no remitir mensajes no solicitados ni autorizados previamente a una pluralidad de personas, cualquiera que sea el origen, la finalidad o el contenido de los mensajes.

4.3. Retirada y suspensión.

En caso de incumplimiento de las presentes Condiciones Generales, la Administración de la Junta de Andalucía podrá retirar o suspender el acceso del usuario al Correo Electrónico del Ciudadano sin necesidad de previo aviso.

5. Responsabilidad por el acceso y uso de contenidos.

5.1. Responsabilidad del usuario.

El usuario asume la responsabilidad exclusiva de las consecuencias que pudieran derivarse de la reproducción, envío o difusión de contenidos de cualquier índole, aceptando voluntariamente que accede y utiliza el Correo Electrónico del Ciudadano bajo tales condiciones.

5.2. Calidad, exactitud y fiabilidad de los contenidos.

La Administración de la Junta de Andalucía no garantiza la licitud, calidad, exactitud, fiabilidad, utilidad, infalibilidad ni la continuidad de los contenidos transmitidos, difundidos, recibidos o almacenados a través del Correo Electrónico del Ciudadano, excluyendo cualquier responsabilidad derivada de la falta de alguna o algunas de dichas cualidades, o de la interceptación, alteración o eliminación de cualquier mensaje que los usuarios reciban, almacenen o transmitan.

6. Propiedad intelectual.

La Administración de la Junta de Andalucía no autoriza la utilización de los derechos de propiedad intelectual de los que es titular, salvo en lo relativo a la utilización del Correo Electrónico del Ciudadano de conformidad con lo establecido en estas Condiciones Generales.

7. Confidencialidad y protección de datos.

El usuario proporciona a la Administración de la Junta de Andalucía los datos personales incluidos en el formulario web que debe cumplimentar al darse de alta en el Correo Electrónico del Ciudadano.

Estos datos podrán ser objeto de tratamiento automatizado, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, prestando el usuario su consentimiento expreso para que puedan ser incorporados al correspondiente fichero con la finalidad de gestionar, administrar y mejorar la prestación del servicio. El usuario acepta que la Administración de la Junta de Andalucía podrá utilizar su dirección de correo para remitirle información de interés general y de servicio público.

La Administración de la Junta de Andalucía garantiza la adopción de las medidas de seguridad previstas en la normativa vigente respecto al tratamiento de los datos, los ficheros, sistemas e instalaciones, así como la salvaguarda de la confidencialidad de los datos personales.

Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación podrán ser ejercidos mediante comunicación con la Administración de la Junta de Andalucía a través de la dirección de correo electrónico correo.portal@andaluciajunta.es, o ante la Secretaría General para la Sociedad de la Información, sin perjuicio de la utilización que pueda hacerse de cualquier otro medio de comunicación conforme a la normativa vigente.

8. Inicio y terminación del servicio.

La utilización del Correo Electrónico del Ciudadano por el usuario comenzará a partir del momento en que se dé de alta en el servicio y tendrá una duración indefinida.

La Administración de la Junta de Andalucía y el usuario se reconocen recíprocamente la facultad de dar por concluida la prestación del servicio unilateralmente, en cualquier momento.

9. Legislación aplicable.

La prestación del servicio del Correo Electrónico del Ciudadano al que se refieren estas Condiciones Generales se regirá por la legislación española.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 25 de abril de 2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se modifica la de 21 de enero de 2003, por la que se da nueva redacción a la Base cuarta y al segundo apartado de la Base quinta de la Resolución de 12 de julio de 2002, por la que se aprueba la convocatoria de Ayudas de Acción Social, ejercicio 2002, del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Mediante Resolución de 21 de enero de 2003, la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia y Administración Pública daba nueva redacción a la Base Cuarta y al segundo apartado de la Base Quinta de la Resolución de 12 de julio de 2002, por la que se aprobaba la convocatoria de Ayudas de Acción Social, ejercicio 2002, del personal funcionario al Servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Advertido error en dicha Resolución, y de conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la modificación de la misma según se especifica en Anexo:

A N E X O

Donde dice:

R E S U E L V E

«Dejar sin efecto el segundo apartado de la Base Quinta, dando nueva redacción al mismo:»

Debe decir:

R E S U E L V E

«Dejar sin efecto el segundo apartado primer párrafo de la Base Quinta, dando nueva redacción al mismo:»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo competentes en el plazo de dos meses contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 25 de abril de 2003.- El Secretario General Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 21 de abril de 2003, por la que se establecen las bases reguladoras para la realización de programas del Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía por Entidades Públicas y se efectúa su convocatoria para el año 2003.

El Consejo de Gobierno acordó el 26 de diciembre de 1996, aprobar el Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía como vía interdepartamental integral e integradora, para resolver los graves problemas que afectan a una parte de la Comunidad Gitana andaluza, atajando sus carencias en materias tan sensibles para la vida de un pueblo como son la educación, el trabajo, la vivienda o la especial atención a la mujer gitana como pilar fundamental de la institución romaní por excelencia; la familia.

De otra parte, los resultados obtenidos de la aplicación del Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía en la pasada legislatura, hacen necesario el desarrollo normativo del citado Acuerdo de Gobierno.

El régimen jurídico aplicable a la concesión de las subvenciones reguladas en esta Orden será el establecido en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico.

Así pues, en virtud de la Disposición Final Primera del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de diciembre de 1996, a propuesta del Director General de Bienestar Social, y en uso de las facultades que me confiere la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

DISPONGO

Artículo 1. Objeto.

1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y efectuar la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas de intervención social de carácter integral a favor de la comunidad gitana de Andalucía, a desarrollar en el marco del Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía, durante el año 2003.

2. La concesión de estas subvenciones se regirá por el procedimiento de concurrencia competitiva.

Artículo 2. Financiación.

1. Los proyectos serán financiados por la Consejería de Asuntos Sociales, que aportará entre el 50% y el 80% del presupuesto y las Entidades Públicas que aportarán como mínimo el 20% y como máximo el 50% del coste total de la intervención aprobada.

2. La concesión de subvenciones estará limitada a la existencia de disponibilidad presupuestaria.

3. Las subvenciones concedidas podrán imputarse a varios ejercicios, conforme a las disponibilidades presupuestarias de cada uno de ellos.

Artículo 3. Solicitantes. Requisitos.

1. Podrán solicitar subvenciones para la realización de programas de intervención a favor de la comunidad gitana andaluza, en el marco del Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía, las Entidades Locales y las Entidades Públicas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Pertener al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Estar legalmente constituidas.

c) Cumplir las obligaciones en materia de autorización y registro establecidas en el Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorización, registro y acreditación de los Servicios Sociales de Andalucía.

d) Carecer de fines de lucro en el desarrollo de su actividad.

2. Los anteriores requisitos deberán reunirse el último día de plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la justificación de la subvención concedida.

Artículo 4. Solicitudes y documentación.

1. Las Entidades interesadas en obtener subvención habrán de presentar una solicitud dirigida al Delegado Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales que corresponda a su domicilio, formulada conforme al modelo que figura como Anexo 1 de la presente Orden, suscrita por quien ostente la representación legal de la Entidad o tenga conferido poder suficiente para ello.

2. Junto con la solicitud, habrán de aportar además los siguientes documentos:

a) Documentación acreditativa de la representación o apoderamiento.

b) Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.

c) Fotocopia de la libreta de ahorro o certificado bancario acreditativo de la cuenta corriente o libreta de ahorro, cuya titularidad ha de corresponder a la Entidad solicitante.

d) Compromiso de financiación con recursos económicos propios comprendido entre el 20% mínimo y el 50% máximo del presupuesto a financiar aprobado por el Órgano de Gobierno correspondiente.

e) Declaración expresa responsable de la concesión o solicitud de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedente de cualesquiera otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, indicando entidad concedente e importe.

f) Declaración responsable de que sobre el solicitante no ha recaído resolución administrativa o judicial firme de reintegro o, en su caso, acreditación de su ingreso, aplazamiento o fraccionamiento.

3. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. No se requerirá la presentación de aquellos documentos que, resultando necesarios a los efectos de acreditación de datos o requisitos exigidos por la presente Orden, ya obren en poder de la Consejería de Asuntos Sociales y se encuentren vigentes, debiendo dejarse constancia en el expediente mediante la oportuna diligencia.

5. La acreditación de los requisitos previstos en la presente Orden se realizará aportando documentos originales o copias compulsadas de los mismos, en todas sus hojas.

6. La compulsión de documentos podrá realizarse en los registros de los órganos administrativos a que se dirijan las solicitudes, en los Registros de los Ayuntamientos, así como en cualquiera de los registros a que se refiere la letra b) del apartado 4 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 5. Lugar de presentación y plazo.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico